



**Artículos periodísticos que incluyen entrevistas  
a José Luis Piñeyro,  
enero-diciembre 2009**

**INDICE**

1. Reestructuran los servicios de inteligencia mexicanos
2. Sociedad: ¿Qué mueve a las protestas de los "tapados"?
3. Sociedad: desertan del ejército uno de cada cinco militares
4. La iniciativa presidencial contra el narcomenudeo y la Ley de Extinción de Dominio son insuficientes
5. EE.UU. admite corresponsabilidad en la lucha antidrogas con México
6. Narcos mejicanos viven su "sueño americano"
7. Especialista: se requieren estadistas en esta lucha
8. Sí se dará cobijo a cadetes asignados a la erradicación de cultivos ilegales
9. La fe y los santos, soporte de los narcotraficantes
10. Acerca de "Como en Vietnam, como en Irak".
11. El Estado, rebasado
12. Los relevos en el gabinete se tardaron y son insuficientes, opinan diversos sectores
13. Narcos mexicanos retan soldados como si fueran otro ejército, según analistas

1	<b>Reestructuran los servicios de inteligencia mexicanos</b> Publication: SUN - National News Provider: El Universal February 08, 2009

Sin legislación, protocolos ni transparencia que garanticen su legalidad y eficacia, las operaciones de infiltración, enfocadas en la seguridad pública, han ido convirtiéndose en actividades primordiales para los servicios secretos civiles y militares mexicanos, como parte de sus atribuciones de inteligencia. Funcionarios e información clasificada del Consejo de Seguridad Nacional confirman la relevancia que han adquirido en el gobierno calderonista los operativos encubiertos contra la delincuencia organizada, así como “individuos y grupos vinculados al financiamiento de grupos terroristas y subversivos”. Podría ser el auge de los espías. Servidores públicos consultados prefieren aludir anónimamente a los operativos encubiertos efectuados a últimas fechas por los servicios de inteligencia contra los cárteles del narcotráfico, debido a que las actividades encubiertas de los agentes secretos no están acotadas expresamente por la ley ni existen protocolos que permitan medir su eficacia ni garantizar que no saldrán de control. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada faculta a la Procuraduría General de la República para realizar operaciones de infiltración, pero no al Centro Nacional de Información y Seguridad Nacional (Cisen), ni a las secretarías de Defensa y Marina. Funcionarios de inteligencia militar entrevistados confirmaron en que el gobierno federal mantiene una agenda secreta que ha implicado este tipo de operaciones como parte de la estrategia para debilitar a las organizaciones de narcotraficantes.

Tal estrategia de inteligencia se basa en un documento reservado (que data de febrero de 2008 y al que accedió EL UNIVERSAL) que guía la acción de los servicios de inteligencia para infiltrarse. Se titula “Programa para la Seguridad Nacional”; fue elaborado en el seno del Consejo de Seguridad Nacional, y precisa “objetivos y líneas de acción” para el espionaje. Algunos de los objetivos plasmados en ese documento implican que los organismos de inteligencia podrán hacer monitoreos para “detectar y acotar intentos de la delincuencia organizada”, y coadyuvar a “elevar el nivel de eficacia en la integración de averiguaciones previas” en el Ministerio Público, con “productos de inteligencia”. Como parte del plan de acción del área de seguridad nacional del gobierno, que involucra al Cisen y las unidades de inteligencia de la Defensa y Marina, se ha decidido también, según el propio “Programa para la Seguridad Nacional”, “generar inteligencia en torno a individuos y grupos vinculados al

financiamiento de grupos terroristas y subversivos”. Es público que el Cisen preside el recién formado Comité Especializado de Alto Nivel en Materia de Desarme, Terrorismo y seguridad Internacional (Candesti), facultado para “prevenir, combatir y eliminar las amenazas de la proliferación de armas de destrucción masiva que pudieran vulnerar la seguridad nacional”. Pues bien, parte de esa agenda, según el programa citado, incluye además la orden de aumentar “el flujo y calidad de información aportada por agencias extranjeras” y “poner en marcha medidas de contrainteligencia”. -Nueva era de contrainteligencia

A falta de normas legales, la Secretaría de la Defensa Nacional elaboró hace años manuales confidenciales acerca del significado de las acciones de contrainteligencia y las facultades de sus oficiales en las operaciones. Por ejemplo, “Descubrir y neutralizar a toda persona, grupo o empresa que realice actividades contrarias al orden interno del país” es uno de los objetivos de esas operaciones, según el Manual de contrainteligencia de la Sedena, el cual precisa que las “unidades especializadas de contrainteligencia” (como son denominadas sus células de espías) están facultadas para “capturar a los agresores”, así como actuar “sobre cualquier estructura u organización”. En la Secretaría de Marina y la Defensa Nacional, sostienen fuentes de inteligencia militar, se avanza en la reestructuración de la Sección Segunda, el área de las fuerzas armadas responsable de inteligencia. Este hecho exhibe esa lógica gubernamental. En el Cisen, al área de Contrainteligencia se le facultó para realizar “operativos específicos” cuyo propósito es obtener información “a través de diversos medios”, según un documento interno elaborado hace seis años. Pero lo importante es que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria facultó a este Centro para destinar parte de su presupuesto —que pasó de mil 300 millones el año pasado, a más de 2 mil 300 millones de pesos el actual— a la adquisición de equipo destinado a tareas contra el crimen organizado. Y que fue recontratado Joaquín Arenal, experto en operaciones encubiertas, que en el sexenio foxista fue cesado como director de Investigación del Cisen por espionaje y por haber autorizado infiltrar al ex gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez.

El actual director general, Guillermo Valdés, lo designó director de Contrainteligencia, una de las áreas que, según informes, intensificará sus actividades. -Acosta Chaparro

“reloaded” Funcionarios de inteligencia militar aseguraron que altos los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional hicieron un acuerdo con el general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro para reorganizar la estructura del aparato de inteligencia. “Está muy cerca de la Sección Segunda”, sostiene un funcionario militar; “está asesorando en asuntos de narcotráfico y subversión”. Testimonios recabados en los servicios de inteligencia militar y la Secretaría de la Defensa afirman que se solicitó la “colaboración” del veterano ante la insuficiencia de información en las áreas estratégicas de inteligencia, particularmente en expedientes relacionados con crimen organizado y seguimiento estratégico de grupos armados. La crisis de calidad en la información de inteligencia sobre narcotráfico y guerrilla, así como el cambio generacional en la comunidad de inteligencia militar, que no ha implicado eficacia en operativos ni en los informes de espionaje, ha motivado una reorganización en los servicios secretos del Ejército. “Están reorganizando sus unidades de inteligencia en un contexto de presión por hacer más eficientes sus informes”, sostiene un funcionario. El acuerdo con Acosta Chaparro implicaría su colaboración cercana en el diseño del nuevo esquema estratégico de inteligencia militar, en un contexto de hostilidades de los cárteles de la droga y el creciente número de bajas en del Ejército por enfrentamientos con narcotraficantes.

Este general, con experiencia de tres décadas en operativos sobre el terreno, entrenaría también a la nueva camada de oficiales de servicios secretos de las fuerzas armadas, a cambio de una reivindicación, la cual se hizo en un acto público el 23 de abril de 2007, en el Campo Militar Número Uno, en cuya prisión estuvo casi siete años bajo acusaciones de vínculos con el narcotráfico. En un comunicado sobre aquella ceremonia, la Defensa Nacional se refirió a Acosta Chaparro y demás militares con los que fue honrado, como “un selecto grupo de generales que son fiel testimonio de una vida de patriotismo, lealtad, abnegación”. Acosta Chaparro es parte esencial de la reorganización de los servicios secretos del Ejército desde una posición que le permite invisibilidad, coinciden funcionarios de inteligencia militar. -Derechos en riesgo Independiente de su ilegalidad en México, Carlos Resa Nestares, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, experto sobre crimen organizado, opina que “la infiltración es el mejor método de obtención de información” y que en el ámbito del

	<p>crimen organizado “ha resultado una técnica que ha obtenido generosos réditos a la hora de desintegrar este tipo de grupos delictivos”; aunque al mismo tiempo la información no es útil, per se; “se necesita un proceso de elaboración que la convierta en pruebas condenatorias ante un juzgado”. José Luis Piñeyro, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, expresa su preocupación por el incremento de las actividades encubiertas en un contexto de controles limitados y ambiguos, donde “pueden cometerse excesos y una eventual violación a los derechos humanos”. EL UNIVERSAL/JGCNNNNN</p> <p><b>INICIO</b></p>
2	<p><b>Sociedad: ¿Qué Mueve A Las Protestas De Los "tapados"?</b>  Publication: El Financiero - Newspaper  Provider: El Financiero  February 19, 2009</p>
	<p>Los "tapados", como se da en llamar a jóvenes, adultos, mujeres y niños que se lanzan a las calles a cerrar vialidades urbanas y puentes internacionales para exigir que se vaya el Ejército del norte y Golfo del país, podrían estar siendo reclutados y pagados no tanto por el narco, como es la versión oficial, sino por autoridades locales a las que no les conviene la injerencia militar en asuntos de la región, o podrían ser la propia base social de los narcotraficantes.</p> <p>Desde mayo de 2007 el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, admitió que los traficantes lograron crear "una base social" de apoyo en la población, aunque sea por miedo o por temor a denunciar a los delincuentes.</p> <p>El maestro José Luis Piñeyro, de la Universidad Autónoma de México, experto en temas de seguridad pública y fuerzas armadas, ofrece su análisis sobre esta movilización masiva de ciudadanos que se muestran hostiles contra la presencia de soldados:</p> <p>"El propio gobierno ha reconocido que existen bases sociales de apoyo al narcotráfico en varias regiones del país. Al parecer, los que reciben paga se combinan con personas que en efecto han sido agredidas y a quienes se les han violado sus derechos humanos, pero todo ello mezclado en un coctel explosivo con los desempleados viejos y nuevos que provoca la crisis económica, en el que tienen su parte tanto las policías, como los políticos y los grupos locales de interés que ven</p>

amenazado su negocio ilícito."

Si, como se ha dicho públicamente, estas personas que salen a la calle a provocar disturbios y cierre de vialidades reciben una paga directa de los traficantes (entre 300 y 500 pesos), hay un ejército de reserva que puede ser sumamente peligroso.

Otro ejército de reserva lo constituyen los desertores de las fuerzas castrenses, que suman 150 mil en años recientes. Con 1 por ciento de ellos trasladados al narco, entrenados, capacitados y armados, habría un ejército paralelo. Si se habla del 3, 5 o 10 por ciento, la amenaza es incontrolable.

Piñeyro recuerda cuando el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, describió el universo de la "base social" del narco en 500 mil mexicanos: 300 mil dedicados a la siembra y cosecha de drogas, 160 mil narcomenudistas, transportistas, distribuidores e informantes, y 40 mil en diferentes niveles de mando, incluidos los sicarios.

"Inclusive, se me hacen pocos", sugiere, dada la capacidad violenta y de movilización que se denota a diario en todos los medios.

Ausencia de Estado

"Tanto la aparición de 'tapados', como el surgimiento de supuestos grupos de autodefensa, como los anunciados en Ciudad Juárez, solamente pueden darse cuando hay ausencia de Estado, cuando no hay credibilidad ni la confianza mínima en policías, ministerios públicos y jueces que en muchas ocasiones se ha confirmado que están al servicio de los intereses criminales."

Un caso reciente fue el del "comando justiciero" (así fue descrito en muchos medios) que incursionó en la cárcel de Torreón y ejecutó a golpes a tres presuntos plagarios del empresario de Monterrey Rodolfo Alanís, el cual fue ejecutado y aun así sus victimarios quisieron cobrar rescate. Los cuerpos de los supuestos secuestradores, entre ellos el militar Ubaldo Gómez Fuentes, fueron rociados con gasolina y quemados por estos sicarios.

-¿Fueron grupos de autodefensa, como los de Colombia?

"Aún no, pero no falta mucho para eso. Me da la impresión de que se trató de una triple ejecución sobre pedido. Empresarios o amigos de la víctima pudieron pactar con pistoleros para hacer este trabajo sucio, del cual se salvó 'la doctora' que está

	<p>acusada de haber puesto a las víctimas para ser secuestradas por sus cómplices". Se trata de la odontóloga María de Jesús Guerrero Díaz, acusada de ser la persona que "ponía" a los secuestrables que eran parte de su clientela.</p> <p><b>INICIO</b></p>
3	<p><b>Sociedad: Desertan Del Ejército Uno De Cada Cinco Militares</b> Publication: El Financiero - Newspaper Provider: El Financiero March 12, 2009</p>
	<p>Cuando el portal de Transparencia de la Secretaría de la Defensa Nacional publicó el año pasado que en solamente un lustro (2002 a 2006, incluidos ambos) desertaron 150 mil soldados mexicanos, se encendieron focos rojos y menudearon propuestas para dar seguimiento a los desertores y aplicar castigos ejemplares a quienes se hubiesen pasado al lado del enemigo.</p> <p>La alarma por la cantidad de deserciones en el Ejército no es para menos: en 2005, casi 40 mil deserciones equivalían a uno de cada cinco militares en activo.</p> <p>Peor aún. Contra la tendencia histórica de que la mayor parte de quienes abandonaban las filas castrenses eran elementos de tropa, se comenzaba a registrar un éxodo de oficiales, más de un millar durante el sexenio de Vicente Fox: nueve tenientes coroneles, 31 mayores, 32 capitanes primeros, 39 capitanes segundos, 345 tenientes y 567 subtenientes.</p> <p>Un dato adicional: habían abandonado las filas cuatro mil 873 soldados de entre unos diez mil transferidos por la Secretaría de la Defensa Nacional a tareas de seguridad en la Policía Federal Preventiva, particularmente a las llamadas Fuerzas Federales de Apoyo, con lo cual no solamente habían cambiado el verde olivo por el gris de la PFP, sino que su situación laboral quedó en el limbo entre las atribuciones presupuestales de la Sedena y la SSP, y perdían prestaciones.</p> <p>El especialista en Fuerzas Armadas y seguridad José Luis Piñeyro, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, señala que la incorporación de cada vez más tropas a labores propias de los civiles en el combate a la delincuencia organizada ha provocado cambios que redundan en la incapacidad del Ejército para retener a sus integrantes:</p> <p>"Habría que revisar qué tan efectivo es el sistema de reclutamiento, y si los jóvenes</p>

ingresan más por una urgencia económica y para sortear temporalmente la crisis de desempleo, que por una verdadera vocación castrense, como está ocurriendo."

Un indicio de que se hace una pesca masiva e indiscriminada para que muchos miles pasen del ejército del desempleo al Ejército Mexicano, son esas mantas y mesas colocadas en estaciones del Metro, en terminales de autobuses, en sitios populosos, en las que se invita a los jóvenes a tomar la carrera de las armas mediante requisitos mínimos y sin criterios de selección.

Aún bajos salarios

El general en retiro y diputado federal Roberto Badillo dice que hay un 10 a 15 por ciento que llegan sin vocación y no soportan el rigor del entrenamiento, el orden y la disciplina que se exige o pasan más de 40 días en un retén y semanas en la selva y en la sierra destruyendo plantíos y obligados a estar lejos de la familia.

En la raíz de muchas deserciones han estado los bajos salarios. Al inicio de este sexenio había sueldos de tres mil 500 pesos mensuales para soldados rasos. Lo primero que se hizo fue aumentar mil pesos a la tropa, al año siguiente otros 500 y hace poco otros mil, "con lo que esperamos que se inicie la curva descendente" de desertores, que en un año llegaron a 39 mil.

Piñeyro insiste en que, aunque han aumentado salarios y prestaciones, sigue siendo poco atractivo mantenerse en el Ejército, ya que en su nuevo papel en la "guerra" contra el narcotráfico impone más obligaciones en selvas, sierras y desiertos, con fajinas intensas, pero también ahora con más riesgo en poblaciones y caminos donde abundan sicarios muy bien armados.

Otros factores de desaliento tienen que ver con la obligada lejanía de la familia, que suele implicar más gasto porque no hay "viáticos", sino concentración de tropas en cuarteles existentes o improvisados; la rotación de zonas geográficas (medida preventiva para evitar que los militares se contaminen con los políticos y los poderes económicos y caciquiles locales), analiza en voz alta Piñeyro y señala que el sicariato de los carteles de la droga se integra por jóvenes que pueden tener altos ingresos, aunque en condiciones de alto riesgo.

"Agrégale que los patrullajes militares ya no disuaden a los narcos, que aparecen soldados y oficiales decapitados (Guerrero hace tres meses); así, muchos elementos

	<p>actúan a sabiendas de que en esto que el gobierno ha denominado guerra, el enemigo les anda pisando los talones."</p> <p>Traición a la patria</p> <p>Propuestas como la del panista Daniel Ludlow, de procesar a elementos que dejen el Ejército para unirse a la delincuencia organizada, y juzgarlos como "traidores a la patria", difícilmente pueden prosperar. Es casi imposible dar seguimiento a decenas de miles, la mayoría de los cuales se van por bajos salarios y por falta de vocación, según el diputado y general Badillo.</p> <p>Explica que un elemento que llega soltero puede ahorrar, porque tiene alimento, hospedaje, atención médica, ropa, calzado. A veces entran dos y tres hermanos o primos. Juntan un dinerito y se van, porque se compraron unas vaquitas o porque esperan cruzar la frontera de indocumentados.</p> <p>-¿Cada día la milicia es una profesión de más alto riesgo? -se le pregunta.</p> <p>-Por supuesto que sí. Más ahora que pasaron de 23 mil a 45 mil los soldados destinados al combate al narcotráfico. Y los marinos de casi tres mil a cinco mil, apunta el general Badillo, secretario de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.</p> <p>Es imposible, sería costosísimo dar seguimiento a tantos desertores, señala. Y defiende el fuero de justicia castrense: "No es para privilegiar a los militares, sino para imponerles penas más severas cuando cometen algún delito."</p> <p><b>INICIO</b></p>
4	<p><b>Breves informativas</b>  Publication: Notimex - National News  Provider: Notimex  March 19, 2009 (18:14)</p>
	<p>México, 19 Mar (Notimex).- El secretario de Desarrollo Social (Sedesol), Ernesto Cordero, informó que desde octubre del año pasado la leche de Liconsa se vende parcialmente descremada, por lo cual no es un factor de obesidad, ya que recientemente se modificó la composición de ese producto.</p> <p>Entrevistado durante el lanzamiento de la segunda etapa de la campaña para el consumo de ácido fólico, el funcionario señaló que ese lácteo "es un gran producto a muy buen precio y probablemente la mejor leche que se pueda consumir en el país".</p>

La iniciativa presidencial contra el narcomenudeo y la Ley de Extinción de Dominio son insuficientes, por lo que deben modificarse para evitar que las cárceles se llenen de drogadictos y no de traficantes, consideró el investigador José Luis Piñeyro.

En un comunicado, el académico de la UAM señaló que en la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio deben omitirse potenciales arbitrariedades, mientras en la lucha contra las drogas se corre el riesgo de que cualquier persona drogadicta termine en la cárcel.

Con las Brigadas de Atención Buco-Dental, alumnos de la Facultad de Odontología de la UNAM atendieron a 800 habitantes de la comunidad de Mocorito, Sinaloa, donde colocaron prótesis dentales a personas de bajos ingresos, como parte de su servicio social.

En un comunicado, el secretario de Relaciones Estudiantiles de dicha escuela, Arturo Saracho Alarcón, indicó que se ofreció tratamiento con tecnología de punta, como servicios generales de obturación, restauración, prevención y quirúrgicos.

La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) informó que casi 80 por ciento de los más de cinco mil proyectos productivos que apoyó en 2007 están en operación y sólo 20 por ciento se encuentran inactivo por malas condiciones meteorológicas y desastres naturales, entre otros factores.

Otros proyectos supervisados, se vieron afectados por enfermedad o desintegración del grupo beneficiado, o porque no hubo una aplicación correcta de los recursos, pero refrendó el compromiso de la SRA para que esos apoyos lleguen a quien realmente los necesite.

El Departamento de Atención a la Salud de la UAM desarrolla investigaciones de materiales nanoestructurados para atender padecimientos como epilepsia, mal de Parkinson y cirrosis, informó Tessy María López Goerne, investigadora de esa casa de estudios.

Al participar en el Segundo Coloquio La Ciencia en México en el Siglo XXI. Medicina y Nanotecnología, expuso que a niveles cerebral y corporal se diseñan materiales para introducir el fármaco dentro del "órgano blanco", a fin de lograr que su efecto sea directo y de acción prolongada.

La diputada federal de Convergencia, Layda Sansores, informó que la próxima

	<p>semana realizará una "clausura simbólica" al restaurante "La Terraza" del Palacio Legislativo de San Lázaro, por una serie de abusos laborales contra meseros y empleados.</p> <p>En improvisada rueda de prensa, acusó a los dueños de la Fonda San Angel, concesionarios de "La Terraza", de retrasar hasta 10 días el pago de salarios a los meseros, garroteros y cocineros, y planteó la falta de vigilancia a ese local por el Legislativo.</p> <p><b>INICIO</b></p>
5	<p><b>EE.UU. admite corresponsabilidad en la lucha antidrogas con México</b>  Publication: Diario El Comercio - International  Provider: Diario el Comercio  March 26, 2009  México. AP</p>
	<p>La secretaria de Estado, Hillary Clinton, aseguró que EE.UU. comparte la responsabilidad con México para enfrentar a los carteles de las drogas.</p> <p>La "insaciable" demanda de drogas en su país y la incapacidad de detener el tráfico de armas hacia México están detrás de la creciente violencia en la frontera. Clinton llegó a México para una visita de dos días. Se reunirá con el presidente Felipe Calderón y la canciller Patricia Espinosa para abordar la cooperación antidrogas. Y aseguró que "tenemos una corresponsabilidad" en la lucha que México libra contra las organizaciones de narcotraficantes.</p> <p>Las declaraciones de la funcionaria representan las más enfáticas del Gobierno de Estados Unidos en admitir que ese país comparte la responsabilidad sobre la situación. "El tema de seguridad es naturalmente uno de los más relevantes", declaró la víspera la Canciller mexicana sobre la visita de dos días de Clinton. Clinton también aprovechará para afinar detalles del próximo viaje del presidente Barack Obama a México a mediados de abril.</p> <p>La llegada de la Secretaria de Estado ocurre un día después de que el gobierno de Obama anunciara un reforzamiento de su frontera con México para contener la expansión de la violencia de los carteles a su territorio. Y luego de que México lograra capturar a tres presuntos capos de la droga.</p> <p>Para el analista de la Universidad Autónoma Metropolitana José Luis Piñeyro, el</p>

	<p>anunciado fortalecimiento de la seguridad en la frontera sur estadounidense “habría que enmarcarlo dentro de reclamaciones del Gobierno mexicano a Estados Unidos con respecto a su control mínimo del tránsito ilegal de armas a México”. Agregó que habría que señalar si EE.UU. se compromete a un mayor control de sus precursores químicos para elaborar drogas sintéticas y el control de dólares para lavado de dinero”.</p> <p>Las recompensas millonarias.</p> <p>Militares mexicanos capturaron a un lugarteniente del cartel de las drogas de los hermanos Beltrán Leyva. Ese es el primer arresto desde la publicación esta semana de una lista de recompensas millonarias con los nombres de los principales líderes del narcotráfico del país.</p> <p>Héctor Huerta Ríos, alias ‘La Burra’ o ‘El Junior’, fue detenido el martes en las afueras de Monterrey, con cuatro de sus guardaespaldas, informó el jefe operativo del estado mayor de la Defensa, general Luis Arturo Oliver.</p> <p>Huerta era uno de los 13 lugartenientes del narcotráfico mexicano por el que el Gobierno ofrecía hasta USD 1 millón por su captura.</p> <p>En lista de recompensas también aparecen 24 líderes de los seis carteles que operan en México. Por ellos, se ofrecen hasta USD 2,1 millones por cada uno.</p> <p>En México operan seis carteles según la lista de recompensas divulgada el lunes: del Golfo-Zetas, del Pacífico, de los Beltrán Leyva, de los Carrillo Fuentes, de la Familia y de los Arellano Félix.</p> <p><b>INICIO</b></p>
6	<p><b>Narcos mejicanos viven su "sueño americano"</b>  Publication: La Voz del Interior  Provider: La Voz del Interior  FFF 31, 2009 <b>Agencia AP</b></p>
	<p><b>Nueva York.</b> Los carteles de la droga mejicanos que luchan de manera feroz para crecer y sobrevivir tienen un poderoso incentivo financiero al otro lado de la frontera, pues Estados Unidos es un mercado insuperable de drogas por su amplia capacidad económica, diversidad y voracidad.</p> <p>De los adictos a la metaanfetamina en los campamentos de casas rodantes en el medio oeste, a los vagabundos adictos a la heroína en las grandes ciudades, pasando</p>

por las estrellas del espectáculo, los deportistas, los adolescentes que fuman marihuana con sus padres, en total 46 por ciento de los estadounidenses mayores de 12 años han incurrido en el destructivo pasatiempo nacional del consumo ilícito de drogas.

Esta gama de consumidores representa un mercado enorme, resistente a la recesión económica y aparentemente interminable para los carteles mejicanos de la droga, que sostienen una guerra entre sí y contra el gobierno mejicano en la que murieron unas 11 mil personas desde diciembre de 2006.

Sin importar cuanta ayuda, incluso financiera, le dé el gobierno de Estados Unidos a México, la relación básica de oferta y demanda impide que esas acciones tengan el éxito esperado.

“El daño que causa nuestra demanda insaciable de drogas es realmente espantoso”, opina Lloyd Johnston, investigador de la Universidad de Michigan que analiza sondeos anuales sobre el consumo de drogas.

Las nuevas cifras muestran que 114 millones de estadounidenses utilizaron drogas ilegales en algún momento de su vida, de los cuales 20 millones son consumidores actuales.

La marihuana es la droga más común: 100 millones de estadounidenses la probaron, incluyendo casi la mitad de los estudiantes del último año de secundaria. Pero no es la única droga popular, pues 35 millones de estadounidenses consumieron cocaína en alguna ocasión y 34 millones usaron LSD u otro tipo de alucinógenos.

“Este es el sueño de cualquier narcotraficante, vender en un lugar donde pueda ganar la mayor cantidad de dinero posible por el riesgo asumido”, señala el médico H. Westley Clark, director de la organización federal Centro de Tratamiento por Abuso de Sustancias.

“Hay una tremenda negación hasta que se está frente al problema”, señala Clark. “Cualquiera puede ser un consumidor consuetudinario de drogas. Todos están en riesgo”, sostiene.

**Metamorfosis.** En el pasado, México era un país de tránsito para las drogas provenientes de Sudamérica, pero ahora es uno de los productores y distribuidores más importantes. Las pandillas controlan las redes de la cocaína en muchas ciudades

de Estados Unidos e incluso cultivan marihuana en terrenos públicos estadounidenses, como parques nacionales.

El gobierno mejicano emprendió una guerra contra el narcotráfico y colabora con las autoridades estadounidenses que prometieron detener el tráfico de armas de Estados Unidos a México, pero ambas partes saben de la importancia que tiene el consumo de drogas entre la población estadounidense.

“Cuando el gobierno de Estados Unidos es demasiado estricto, entonces se nota que la gente utiliza la vieja fórmula de decir a los estadounidenses ‘ustedes también son corruptos, consumen drogas, son los mayores consumidores del mundo’”, dice el sociólogo José Luis Piñeyro de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México.

Los estudios sobre el uso de drogas entre los jóvenes de Europa muestran a pocos países con problemas graves, pero en general el consumo es bastante menor que entre los jóvenes estadounidenses.

“No hay forma de ignorar que tenemos los niveles más altos de consumo de drogas en el mundo”, indica Craig Reinerman, sociólogo de la Universidad de California en Santa Cruz.

Todo sondeo muestra el gran espectro del uso ilegal de drogas, en todas las regiones del país, entre todas las razas y en todos los grupos socioeconómicos.

“Existe la idea de que el consumo de drogas es más común entre las minorías raciales, especialmente entre los negros”, señala el médico Wilson Compton, director de división en el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas. “Pero no es verdad. Entre ellos los índices son menores o al menos no son mayores”, asegura.

Reinerman puso como ejemplo el aumento reciente en la ingestión de metaanfetamina en los estados del centro del país como Iowa, Misuri y Kansas.

“Ahí la gente vive en viviendas precarias, en pueblos que están agonizando ... y entonces llega una droga que produce una gran excitación”, dice. “No se pueden separar los problemas de las drogas de una serie mayor de problemas sociales y personales. No se puede tener una política sobre drogas que funcione, a menos que forme parte de una política social mucho más amplia”, concluye.

**INICIO**

7	<p><b>Especialista: se requieren estadistas en esta lucha</b>  Publication: Milenio Diario D.F.  Provider: Milenio Diario  June 09, 2009</p>
	<p>El gobierno federal desplegó en Ciudad Juárez al Ejército para combatir al crimen organizado. Foto: Jesús Quintanar El gobierno federal realizó en 2008 inversiones en equipo aéreo y marítimo para las fuerzas de defensa y seguridad por más de 27 mil millones de pesos, equivalente a casi el doble del presupuesto de la UNAM, para tratar de contener una criminalidad que "no ha dejado de agravarse". Así lo informó el especialista en temas de seguridad José Luis Piñeyro al referir que "para una tarea de esta envergadura se necesitan estadistas y no gobernantes sexenales", además de una política económica que generen empleo bien remunerado y permanente. El profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), alertó que "seguirá dominando la lógica represiva sobre la preventiva, la participativa y la de rehabilitación en la estrategia de seguridad pública" en el combate al narcotráfico. Esto, porque el mejoramiento real y sostenido de las condiciones económicas de la mayoría de la nación mexicana, no es considerado en la actualidad como elemento clave para la lucha pro seguridad pública y anticriminal. En entrevista por separado, Jorge Chabat, catedrático del CIDE, aseguró que la estrategia contra el narco emprendida por el presidente Felipe Calderón, "es la menos mala. La más adecuada sería quitar la prohibición, pero ahora no se puede". Y agregó: "En las actuales circunstancias, es mala, claro que lo es, porque genera violencia, pero lamentablemente estamos en una situación que hay que escoger entre lo menos malo y lo peor. Ésta es la mala; la tolerancia es la peor". Chabat afirmó que México se está colombianizando; "hay violencia como en los 80, pero no hay otros actores como guerrilla y paramilitares. Sí hay semejanzas, pero Colombia ha logrado reducir el problema".</p> <p>El investigador del CIDE consideró que las afectaciones al crimen organizado han sido mínimas; por ejemplo, dijo, las detenciones de los hijos de los capos sólo significan "un golpe más", que a la larga debería debilitarlos, pero el problema es como "una hidra. Le cortas la cabeza y surge otra". Incluso, en lugares como Ciudad Juárez, Guerrero y el Distrito Federal la violencia del narco es cada vez más</p>

	<p>perceptible por la sociedad civil y a eso debe agregarse la corrupción en los cuerpos policíacos. A escala nacional, 37 por ciento considera que la delincuencia organizada es la principal amenaza a la seguridad nacional de acuerdo con la encuesta en Seguridad Nacional realizada por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia en octubre de 2008. Otro 15 por ciento asegura que es la inseguridad pública; 9 por ciento se refirió a los grupos armados; 6 por ciento se refirió al terrorismo y otro porcentaje igual a la corrupción. <b>Prohibición de drogas</b> Un camino posible en el combate contra el narcotráfico es eliminar la prohibición de las drogas, afirmó Chabat. Se podría cambiar la ley, que es quitar la prohibición, "con todo y que tiene costos". Sin embargo, esto convertiría al negocio del tráfico de drogas en "un problema de salud. Le daría a las drogas su justa dimensión". "Si se quitara la prohibición, el Estado se evitaría andar de tras de estas bandas que surgen porque el negocio es ilegal si no fuera así no tendrían que estar matando a gente en la calle. Se eliminaría la violencia y la corrupción", aseguró.</p> <p><b>Claves Gobierno vs narco</b></p> <p>José Luis Piñeyro, especialista en temas de seguridad, aseguró que de acuerdo con cifras oficiales, 500 mil personas apoyan al narcotráfico. De ellos, 300 mil son sembradores; 160 mil comerciantes, vigilantes, transportistas, distribuidores y narcomenudistas, y 40 mil capos de diverso rango.</p> <p>Desde que el presidente Felipe Calderón, quien había anticipado que las acciones representaban una guerra que costaría vidas de militares y policías, así como tiempo y recursos económicos, emprendió la lucha contra el narcotráfico han muerto 10 mil personas en todo el país.</p> <p><b>INICIO</b></p>
8	<p><b>Sí se dará cobijo a cadetes asignados a la erradicación de cultivos ilegales</b>  Publication: La Jornada Newspaper  June 19, 2009</p>
	<p>JESÚS ARANDA La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reuló de su postura de no "cobijar" a los 5 mil 200 cadetes que participan en la erradicación de cultivos de droga en Sinaloa, Chihuahua y Durango, e informó que el <i>operativo</i> en el que participan los jóvenes cuenta con un "esquema integral de seguridad".</p> <p>El pasado lunes, al dar el banderazo de salida a los contingentes de cadetes, el</p>

	<p>director del Colegio Militar, general de brigada Gonzalo Bernardino Durán Vélez, señaló que “en todas partes hay riesgo, en todas las actividades”. Subrayó que los jóvenes (hombres y mujeres de todos los grados de instrucción castrense) están entrenados y capacitados para cumplir con esa tarea.</p> <p>Sin embargo, en un comunicado fechado en Culiacán, Sinaloa, la Sedena informó que los cursantes iban a zonas “previamente seleccionadas”, y que la dependencia cuenta “con tropas locales de amplia experiencia y conocimientos en el área de operaciones”, y que se realizan reconocimientos terrestres y aéreos para dar cobertura al despliegue de las tareas que realizan los cadetes.</p> <p>Además, se mantiene en alerta a las fuerzas de reacción de las unidades acantonadas en el mando territorial, para brindar apoyo en cualquier eventualidad.</p> <p>El director del colegio había afirmado que los jóvenes erradicarían cultivos como cualquier otra unidad del Ejército, sin ningún “cobijo” adicional.</p> <p>Por otra parte, el especialista en temas de seguridad nacional José Luis Piñeyro aseveró que la decisión del alto mando de enviar por primera vez cadetes a erradicar cultivos de drogas, así como “invitar” a conscriptos del Servicio Militar Nacional a encuadrarse durante dos meses y erradicar plantíos de estupefacientes durante un mes, revelan que se mantiene un alto índice de deserción en el Ejército y que este organismo enfrenta problemas de reclutamiento.</p> <p>En entrevista con <i>La Jornada</i>, señaló que esto significa que la táctica gubernamental de combate al narcotráfico no ha sido adecuada, ya que las condiciones de aislamiento de los soldados, la separación de sus familias, el riesgo para su vida, la sobrecarga de trabajo a que están expuestos y el incremento de muertes de militares siguen provocando deserciones en el Ejército.</p> <p><b>INICIO</b></p>
9	<p><b>La fe y los santos, soporte de los narcotraficantes</b>  Publication: SUN - National News  Provider: El Universal  June 22, 2009</p>
	<p>Entre el fervor religioso y la violencia extrema, los narcotraficantes mexicanos se mueven con igual facilidad. Su religiosidad es su soporte para interactuar socialmente, igual que sus armas su respaldo para sobrevivir con impunidad e imponerse en su</p>

mundo delincencial. Sus prácticas religiosas, como sus actos criminales, han quedado registrados en expedientes de la Procuraduría General de la República, además de ser temas de debate y análisis entre especialistas en seguridad, sociólogos, religiosos, investigadores de las religiones y de la cultura. El desdoblamiento de los narcos entre lo terrenal y lo espiritual tiene diversas facetas y explicaciones para autoridades, expertos y religiosos. Va desde prácticas culturales y sociales, necesidad de cohesión y unidad dentro del grupo criminal, hasta la autojustificación moral y ética, pero igual es tema de investigación dentro de la seguridad para lograr no sólo entender su proceder, sino también para lograr su captura y el desmembramiento de las organizaciones a las que pertenecen.

Parte también del folclor del narcotráfico, las prácticas religiosas de los capos de las drogas y sus sicarios, con todos sus simbolismos, están presentes en obras literarias, académicas, de seguridad pública y también en las acciones policiales donde capos del narcotráfico han sido detenidos o asesinados, ya sea en bautizos, fiestas de 15 años, bodas y hasta sepelios. Vertientes religiosas del narco De hecho, hay varias vertientes religiosas dentro del narcotráfico plenamente identificadas, asegura Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y especialista en temas de seguridad pública y crimen organizado. Explica que entre estas líneas están las que tienen que ver con el fervor católico, el culto al llamado “Santo Malverde”, las de la Santa Muerte y los santeros, además de aquellos que se creen escogidos como parte de una encomienda divina. “Algunos pensarían que por el ambiente de violencia en que se mueve la gente vinculada al tráfico de drogas no cabría un mundo de religiosidad, pero hay todo un mundo de creencias no sólo para lavar sus conciencias, sino incluso ya hasta para justificar como una acción divina sus actividades ilícitas”.

La vertiente mayoritaria sin duda, agrega, es la vinculada a la religión católica y ello lo podemos ver en las criptas de quienes mueren por esta actividad, los afiches que portan y sus actividades sociales en bautizos, bodas, sepelios. No olvidemos que hasta algunos de los jefes de esta actividad criminal, en específico los Arellano Félix, pudieron reunirse en algún momento con el nuncio Gerónimo Prigione, tras el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, las capturas de algunos capos

en eventos religiosos como bodas, 15 años o bautizos, los escándalos por las llamadas narcolimosnas, entre otros. Las creencia religiosa es muy evidente, comenta y añade que incluso en algunos casos se han valido de todo este mundo religioso para obtener reconocimiento dentro de una comunidad, como por ejemplo donando dinero para mejoras de templos o apoyos para festividades, lo que los convierte ante los ojos de los demás como “buenos creyentes”. Buscan cohesión y unidad

El investigador y especialista en seguridad nacional, José Luis Piñeyro, comenta que cualquier organización sea del tipo que sea debe mantener cierto grado de cohesión, unidad que se logra a través de ciertos principios o simbolismos que van desde los políticos, religiosos, éticos u otros que son fundamentales para el mantenimiento y reproducción del grupo, como sucede también en el caso del narcotráfico o el crimen organizado. La cohesión del grupo bajo principios no sólo permite la unidad, sino también asegura la lealtad, la permanencia de los miembros, la legitimidad de las jerarquías y la fuerza ante cualquier rival o enemigo, como puede ser en el caso de los cárteles de la droga frente al Estado o los cuerpos de seguridad institucional, así como también frente a otros grupos rivales de narcotraficantes. Por ejemplo, explica, el caso más evidente y actual de ello es el de La Familia Michoacana, cuyos miembros reclutados son adoctrinados y se les prohíbe ser alcohólicos o drogadictos, pero por otra parte son capaces de generar una gran violencia y contribuyen a la drogadicción e inseguridad entre la población, lo cual pareciera un mensaje contradictorio o esquizofrénico de ese grupo, pero no lo es si lo vemos en función de su necesidad de cohesión e identidad que requiere la organización criminal frente a otros cárteles enemigos, el Estado y la policía. “No es contradictorio en términos de las necesidades que tiene la organización en su operación y sentido interno, hay una lógica si lo vemos desde este ángulo de supervivencia y mantenimiento del grupo”, comentó.

Una religión a su medida Para la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Sociales y Antropológicos (CIESAS), Elena Azaola, la necesidad de creer en fuerzas superiores que los protejan, los justifiquen ante ellos mismos, los hagan aceptables en su entorno inmediato, entre otros tópicos, hacen que no sólo los narcotraficantes, sino una gran cantidad de delincuentes acudan, profesen, rindan

culto o se inventen las más diversas y disímbolas religiones o santos. Tratar de comprender el mundo en que se mueven a nivel de pensamiento, debería ser una línea muy seria para crear inteligencia para detener a delincuentes y desmembrar sus organizaciones, indica Elena Azaola. Penetrar en ese mundo de los criminales, lo mismo que a sus vínculos terrenales, deben ser parte de un mismo trabajo de investigación policial, subraya la especialista. El punto de vista del obispo de Saltillo, Raúl Vera, sobre la relación entre quien pertenece a un sistema criminal y busca de alguna manera una fuga religiosa, parte de una consideración de Chesterson: “quien no conoce a Dios ante cualquier palo se hinca”. Y de ahí pasó a las Sagradas Escrituras que establecen que el verdadero conocimiento de Dios está en el amor al hermano, al prójimo. “El que dice conocer a Dios y está odiando a su hermano, es un mentiroso”. Desde el punto de vista teológico, dijo, siempre hay una relación entre Dios y la imagen de Dios en el hombre y para entenderlo hay que tener una concepción muy clara de Dios, personalmente creo que un camino para conocerlo nos lo ofrece el mismo ser humano. “Conocer a Dios va muy de la mano de nuestra conducta y comportamiento humano, porque según la idea que tengas de Dios va a ser el tipo de sociedad a la que tu contribuyas”, estableció.

Entonces el cómo entiendo yo ese fenómeno de la religiosidad entre quienes viven bajo un sistema criminal, pues como que quieren una religión a su medida. “Puede ser el culto a la Santa Muerte, los cultos satánicos o cualquier otro que se quieran inventar”, comenta el obispo Vera. Satanizan cultos La mayor parte de narcotraficantes no son en su totalidad devotos de la Santa Muerte, dice David Romo, quien encabeza este culto en México. “En su mayoría —aclara— son devotos de San Judas Tadeo, ese es uno los diagnósticos que podemos hacer con certeza. Y si bien hay quienes erigen en sus casas altares a la Santa Muerte, hay que tomar en cuenta que la devoción está aún en un estado primitivo, hay muchas corrientes y expresiones y resulta que a veces a la Santa Muerte se llega por encomienda, un chamán o del esoterismo que la recomiendan como protección, pero no quiere decir que sean devotos”, señaló. Nuestros devotos son gente común, que se dedica a todo tipo de actividad en México, que llevan una vida regular, que trabaja y se esfuerza para vivir dentro de los cauces y medios legales, afirmó. Sobre la vinculación que se ha

señalado entre esta religión y actividades criminales, explicó que ello es parte de “una campaña negativa hacia la veneración de la Santa Muerte que viene de la Iglesia romana, que al mismo tiempo los medios se han encargado en enfatizar, cuando en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra”.

Nosotros, asumí, tenemos un control sobre nuestros fieles y sabemos a qué se dedica cada uno de ellos. “Se nos ha satanizado, se nos trata de marginar, discriminar y no lo han conseguido porque en nuestros santuarios, altares y templos no permitimos situaciones que nos vinculen con actividades delictivas, por el contrario luchamos porque los jóvenes no entren al mundo de las drogas”, dijo el dirigente de la Santa Muerte. Tampoco, agregó, nos pueden encasillar como un culto entre quienes están en prisión. En las cárceles hay en su mayoría católicos, cristianos, protestantes y sí hay devotos de la Santa Muerte, pero no es el culto que esté extendido entre ellos. Pluralidad religiosa Para el antropólogo Elio Masferrer Kan el asunto de la religiosidad en el narcotráfico es más sencillo de lo que la gente quiere asumir. Los narcotraficantes como miembros de la sociedad participan de la pluralidad religiosa que hay en la sociedad. “Y son creyentes, a veces más creyentes o más practicantes que los miembros de otros segmentos de la propia sociedad”, expresa. El también presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones dice que lo anterior es así porque la actividad de los narcotraficantes tiene un alto riesgo y entonces en definitiva tienen que controlar o manejar niveles altos de incertidumbre, y cómo lo hacen, con actividades de tipo religioso. Desde esa perspectiva no tiene por qué sorprendernos que haya quienes sean devotos del catolicismo, que otros adoren a Jesús Malverde, a la Santa Muerte o practiquen el santería. Ahora bien, agrega, “el culto a la Santa Muerte y a Malverde está perfectamente documentado que aparecieron desde mucho antes de que se diera el fenómeno del narcotráfico.

Es necesario destacarlo porque a veces parece que los narcos inventaron esos cultos y no es así. A esas imágenes se les ha relacionado directamente con los capos, los sicarios y otros, pero no se puede encasillar ni descalificar a un culto así porque sí. La libertad de culto permite a la gente adorar o venerar a quien quiera, todo está bien hasta ahí. El peligro viene en hacer generalizaciones de las religiones. “No se puede decir que todos los devotos de la religión católica sean alcohólicos, que todos los

	<p>cristianos sean unos cínicos, que todos los judíos son agiotistas, que todos los musulmanes son terroristas y por eso no se puede estereotipar a un culto por lo que puedan hacer algunos miembros de cada religión”, finaliza Masferrer. EL UNIVERSAL/JTJNNNNN</p> <p><b>INICIO</b></p>
10	<p><b>Acerca de "Como en Vietnam, como en Irak".</b>  Publication: Proceso Magazine - Political News  Provider: Proceso  July 30, 2009</p>
	<p>De José Luis Piñeyro</p> <p>Señor director:</p> <p>Me permito hacer algunas precisiones sobre el reportaje de Ricardo Ravelo titulado Como en Vietnam, como en Irak, publicado en Proceso 1707.</p> <p>Al solicitarme una evaluación de la estrategia de la guerra contra las drogas en México, mencioné que la guerra es la suma de fuerzas materiales y morales, y que en nuestro país descansa más en las materiales (mejor armamento, entrenamiento, transporte, equipo de comunicación, más salarios –como atractivo de reclutamiento y disuasivo de corrupción–, coordinación interinstitucional, etcétera) que en las morales (vocación profesional, espíritu de cuerpo y sacrificio, patriotismo, etcétera).</p> <p>Puntalicé que esta situación se ha manifestado en la deserción masiva de soldados, la corrupción de policías federales bien pagados, la impunidad de funcionarios policiacos y judiciales, etcétera. Además señalé que tal estrategia anticriminal carece de cinco tácticas amplias y permanentes (rehabilitación de drogadictos, prevención de delitos, confiscación de activos financieros, así como de propiedades, y participación social). Advertí que ésta última táctica es de difícil impulso, ya que a la añeja desconfianza frente a las autoridades policiacas y judiciales se agrega hoy el temor a las represalias de los narcos.</p> <p>A este panorama, apunté, se debe añadir el creciente desempleo y la pobreza en que sobrevive más de la mitad de la población, lo que implica desmoralización social, por lo que se requiere de una urgente política económica y social de Estado, y no sólo de llamados a la unidad nacional al estilo Calderón.</p> <p>Concluí que se debía recurrir a la fuerza moral del Estado y de la nación mexicanos,</p>

pues por sí solo el material bélico no sirve para ganar ninguna guerra, como lo mostraron Vietnam e Irak, donde los soldados estadounidenses superarmados y entrenados no ganaron, entre otros factores, por la falta de moral de guerra.

Ante la pregunta de Ravelo de si en México estábamos frente a una derrota moral, respondí que no habíamos llegado a tal punto. Tampoco afirmé que "la del Ejército es una derrota moral"; creo que aún tiene capacidad de respuesta. El problema es por cuánto tiempo puede mantenerla y en cuánto espacio territorial puede actuar, y, por otro lado, cuánta "democracia" más puede aguantar nuestra empobrecida nación.

Si las Fuerzas Armadas, institución vital de cualquier Estado, no pueden y se desgastan más, entonces ¿cuál opción queda? ¿Recurrir a la "ayuda" militar externa? Si no disminuye sustancialmente la pobreza nacional, el crimen organizado tiene un ejército de reserva con un porcentaje mínimo que reclute de la misma.

México, ante el amplio deterioro humano y moral, no requiere de gobernantes sexenales, sino de estadistas que elaboren políticas de Estado democráticas anticrimen, económica y social, entre otras. Ojalá que en la nueva diputación federal haya diputados conscientes de la muy grave condición social y estatal y aprueben leyes que impulsen tales políticas y no más políticas de Estado oligárquicas; y, por supuesto, ojalá que surjan fuerzas civiles que los obliguen a ser verdaderos representantes populares.

Aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo y felicitarlo por su atinada dirección de un semanario que aborda de manera oportuna y objetiva los grandes problemas nacionales.

Atentamente

José Luis Piñeyro

Respuesta del reportero

Señor director:

Aunque en su carta el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana José Luis Piñeyro menciona algunos datos y frases que no fueron incluidos en el reportaje por razones de espacio, al parecer olvidó que sustentó "la derrota moral" del Ejército Mexicano en las deserciones de militares, que él mismo estimó, en lo que va del sexenio, entre 30 mil y 40 mil soldados, algunos de los cuales, dijo, se enganchan con

	<p>el crimen organizado. Manifestó que algo parecido ocurrió en Vietnam e Irak, para rematar que de poco sirven las armas cuando los soldados no quieren pelear.</p> <p>Atentamente</p> <p>Ricardo Ravelo</p> <p><b>INICIO</b></p>
11	<p><b>El Estado, rebasado</b>        August 17, 2009        Jorge Carrasco Araizaga</p>
	<p>Paramilitares, grupos de autodefensa, guardias privadas y comunidades armadas surgen portodo el país ante una ola de violencia criminal inédita que ha puesto a México al borde de una explosión social. Ese es el resultado de la fallida estrategia de seguridad pública de la administración de Felipe Calderón. Lo peor es que el Ejército ocupa cada vez más espacios de poder con una consecuencia inevitable: más violencia. El Estado está rebasado, concluye el doctor Arturo Alvarado, de El Colegio de México, coordinador de una amplia investigación al respecto de la que Proceso da cuenta en exclusiva. Desde los años inmediatos a la Revolución y a la guerra cristera, México no vivía una violencia homicida como la que ahora padece. Incontrolables desde hace tres años, las muertes violentas por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, decapitaciones, tortura y otras expresiones anteriores, pero continuas, como los feminicidios, han desbordado al Estado mexicano. Ante los altos índices de violencia, son cada vez más los investigadores y especialistas de todo el país que buscan explicar no sólo la violencia del narcotráfico y la reacción punitiva del Estado; también la respuesta violenta que está dando la sociedad. Al igual que Somalia, Haití, Brasil y, en su momento, Colombia, en México se multiplican las organizaciones paramilitares, los grupos de autodefensa, las guardias privadas (nacionales y extranjeras) y las comunidades armadas."</p> <p>El Estado mexicano ni estaba preparado ni previó que todo esto podía pasar", dice el doctor Arturo Alvarado Mendoza, integrante del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México (Colmex), en una entrevista en la que resume los resultados de un amplio trabajo de investigación coordinado por él mismo y que, patrocinado por el Colmex, comenzará a circular en breve en forma de libro. Se intitula ¿Hacia la seguridad nacional? Seguridad nacional y seguridad interior en el siglo XXI, del que</p>

Proceso ofrece adelantos sustanciales en la presente edición. (Ver recuadros). En la investigación participaron Sergio Aguayo Quezada, Miguel Ángel Castillo y Mónica Serrano, del Colmex; Jorge Chabat, Froylán Enciso y Carlos Montemayor; José Luis Piñeyro, de la Universidad Autónoma Metropolitana; Mónica Toussaint, del Instituto Mora; Javier Treviño Rangel, candidato a doctor por la London School of Economics, y el investigador brasileño Jorge Zaverucha, además del propio Arturo Alvarado Mendoza. Doctor en ciencias sociales con especialidad en sociología, Alvarado ha estudiado las expresiones de violencia en la sociedad mexicana, sobre todo desde la llegada del PAN a la Presidencia de la República, y en especial la registrada en "la guerra" de Felipe Calderón contra el narcotráfico. Señala que más de 14 mil muertos en lo que va del sexenio, un número creciente de desaparecidos y los cada vez menos inusuales hallazgos de cementerios clandestinos expresan los niveles de violencia a los que ha llegado el país.

Prácticamente no hay estado que se salve. Si no son feminicidios, son ejecuciones entre narcotraficantes, enfrentamientos de las fuerzas federales con la delincuencia organizada, asaltos a comunidades por parte de milicias u homicidios de todo tipo. "Estamos en una era de violencia criminal inédita, producida tanto por bandas delincuenciales como por las intervenciones militares y policíacas del gobierno federal", sostiene el académico, cuyas áreas de estudio abarcan seguridad pública, justicia y estado de derecho; parte de sus investigaciones las ha realizado en instituciones de Estados Unidos, Japón y Francia. Alvarado considera que ante la escalada de violencia registrada desde hace 15 años en México, Calderón ha tenido una "respuesta inercial": la concentración sin precedente de recursos públicos en seguridad y el despliegue del Ejército como en los períodos más cruentos del autoritarismo del PRI, en particular el movimiento del 68 y la guerra sucia. Calderón incluso ha ido más allá. Ha permitido que el Ejército goce ahora de más autonomía y poder que en regímenes pasados y que asuma funciones civiles como no lo hacía desde la etapa posterior a la Revolución. De acuerdo con datos del propio Ejército, explica, actualmente 500 de sus miembros –desde generales hasta tropa– tienen licencia para ocupar cargos en las policías estatales y municipales de todo el país. Además, esta es la administración que ha destinado el mayor gasto en

seguridad, defensa y procuración de justicia de la historia. Si en 2006, en el último año de Vicente Fox, el presupuesto fue de 59 mil millones de pesos, a mitad de su sexenio Calderón ya dispuso de 266 mil millones de pesos, de los cuales 110 mil millones se asignaron a la Sedena. Una revisión hecha por Alvarado sobre el gasto programado en esos rubros desde 2007 muestra cómo se ha disparado el presupuesto, sin que ello haya significado una disminución de la violencia. Por el contrario. En su primer año, Calderón dispuso de 71 mil millones de pesos, en conjunto, para las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y el Fondo de Seguridad Pública para los Estados y el Distrito Federal. El año pasado, el gasto se elevó a 83 mil millones y en este 2009 llegó a casi 112 mil millones de pesos. En el límite iniciada con asesinatos políticos y el levantamiento armado en Chiapas a finales del sexenio de Carlos Salinas; acentuada por la delincuencia con Ernesto Zedillo, y desbordada por el narcotráfico con Vicente Fox y Felipe Calderón, la violencia de los últimos 15 años en México ha rebasado al Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal–, dice el investigador. La ciudadanía se ha ido quedando indefensa en todo el país, sostiene, y advierte que "la falta de control por parte del Estado nos puede llevar a una explosión, a una epidemia de violencia que no se detiene simplemente con poner al Ejército en la calle y declarar el toque de queda".

Con investigaciones realizadas en la Universidad de Harvard, el Tecnológico de Massachusetts y el Woodrow Wilson International Center for Scholars, Alvarado sostiene que la violencia homicida desbordada y el fracaso del Estado se iniciaron con los feminicidios en Ciudad Juárez. Pero si hace 10 años Chihuahua era el estado con la tasa de feminicidios más alta del país, ahora la violencia de género en el cinturón metropolitano de la Ciudad de México lo ha rebasado. El promedio nacional de feminicidios está debajo de tres casos por cada cien mil habitantes, pero en la zona limítrofe del Distrito Federal pasa de cinco y en algunas partes por encima de seis. Otra manifestación grave de la violencia homicida la identifica en la frontera sur, en Chiapas, pero también en los enfrentamientos armados ocurridos en las calles de Tijuana, Guadalajara, Oaxaca, Culiacán, Durango, Acapulco, Veracruz y otras ciudades del país. Datos oficiales ubican a México entre los países con tasas más

bajas de violencia en América Latina: 23 por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, los niveles de homicidios en algunas ciudades se equiparan con los de algunos países de Centro y Sudamérica que han vivido procesos violentos por guerras civiles y el narcotráfico. La comparación más obvia es con Colombia. En la etapa más cruda de la narcoviencia, ese país llegó a tener tasas de 100 muertos por cada 100 mil habitantes; hoy es de 40 por cada 100 mil, aún demasiado alta. En México, el estado de Guerrero tiene una relación similar, de 39.7. Le siguen Michoacán, con 34.4; Oaxaca, con 31; y Sinaloa y Chihuahua, con 29.9 cada uno, refiere Alvarado. Señala que algunas ciudades de Brasil –como Río de Janeiro– tienen tasas de entre 80 y 100 homicidios, mientras que en la ciudad de Guatemala, en la zona metropolitana de San Salvador y Tegucigalpa la situación es aún peor. "México está en el límite para prevenir una violencia de ese tipo. De no hacerlo, nos puede llevar a una situación como la de Centroamérica, Haití, las favelas de Río de Janeiro o incluso Somalia", considera. Editor de La reforma de la justicia en México, publicado el año pasado por el Colmex, Alvarado abunda: "La violencia está aumentando en todas las dimensiones de la sociedad y no la estamos atendiendo. Hemos tenido días con 40 o 50 muertos", y pueden llegar a ser "mucho más".

Comenta que una consecuencia de la respuesta violenta del Estado al narcotráfico es que se están modificando las rutas de las drogas. "El problema es que cuando se rompen las líneas o cadenas productivas, se reorientan o se van a otro lado. Y la gente se dedica a otra cosa: si antes sólo pasaba droga, ahora roba o secuestra. "Por experiencias históricas sabemos que pasan de un negocio ilegal a otro. Esto va involucrando a otros sectores sociales y por eso tenemos el crecimiento de violencia de todo tipo en el país. Esos efectos colaterales no se están atendiendo. "Menciona también otro fenómeno: "Hay una sorprendente cantidad de cementerios clandestinos en México, a pesar de que los hallazgos de restos humanos parezcan pocos". Hace unos años, las narcofosas acaparaban la atención, sobre todo en la frontera norte, pero Alvarado ha identificado este tipo de tumbas en ocho estados del país, sólo mediante el seguimiento en prensa. Aunque precisa que no se trata de una investigación exhaustiva, asegura que "esto evidencia ejecuciones extrajudiciales sistemáticas en muchas regiones del país que no son registradas, y que hay una

violencia homicida que no observamos". En su diagnóstico sobre la violencia desbordada en México, asegura que el país reproduce ya otro fenómeno que se dio en Somalia, Haití, Colombia y Brasil: la proliferación de grupos paramilitares, de autodefensa y de poderosos aparatos de seguridad privada. Refiere también la presencia de empresas trasnacionales de seguridad que operaron en Afganistán e Irak. "Tienen grupos y comandos especiales de ataque que actúan en caso de un atentado contra sus clientes: grandes empresarios o representantes de empresas trasnacionales. Eso puede ser un peligro de largo plazo. A ellos no les importa la legalidad local ni el Estado ni nada. Sólo sus intereses. Y no hay controles sobre ellos".

Además, hay grupos focalizados que se organizan para tener sus propios aparatos de inseguridad, integrados por gente llegada de Israel, Estados Unidos, Gran Bretaña o Rusia. "¡Qué milicias irregulares hay en este país y que nunca habíamos visto!", exclama. La tendencia es hacia el "vigilantismo", pero el colmo es que instancias oficiales propicien que los ciudadanos se armen, critica. Es el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, que la semana pasada propuso que cada ciudadano tenga un arma para defenderse. "Vivimos una situación en la que estas inercias generan otras olas de violencia. Primero hay estupefacción, luego se acostumbra a ella y después se generan conductas reactivas de la población que no son necesariamente las mejores para resolver los problemas de fondo. "Para el investigador del Colmex, Chihuahua es un ejemplo de esa evolución de la violencia homicida. Después de los feminicidios, hubo estupefacción por los 10 o 12 asesinatos diarios; luego, cada mes fueron subiendo hasta rebasar los 30. Intervino entonces el Ejército por decisión de Calderón, pero no para bajar las tasas y la violencia social, sino para controlar las redes del narcotráfico. Las consecuencias fueron para la población, dice. Ese estado representa también lo limitado de "la guerra" contra el narcotráfico, sostiene Alvarado: "El Ejército entra y sale sin mayor consecuencia. Calderón desmantela a las policías locales porque no sirven, pero no deja nada nuevo. Está generando vacíos policiales en municipios y estados y no le deja capacidad ni al gobernador para recrear una fuerza". Peligroso militarismo Arturo Alvarado identifica otras formas de violencia no vinculadas al narcotráfico, como

las incursiones militares y policiales en diversas regiones del país donde hay movimientos sociales o guerrillas.

A pesar de la poca información que existe al respecto, destaca los combates con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), las incursiones de soldados en colonias populares en Ciudad Juárez y los continuos hostigamientos militares a poblaciones rurales en Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. "Estos hechos no están motivados por la guerra contra las drogas ilegales", asegura. Aunque las guerrillas en México no sean fuertes, ahí están y pueden coexistir con grupos paramilitares, tal y como ocurrió en Colombia. El próximo año, a propósito del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, la guerrilla va a manifestarse por lo menos con comunicados, considera. "La violencia homicida de todo tipo se está manifestando como no ocurría hace mucho. La Revolución y la guerra cristera eran los últimos períodos de violencia extrema", dice quien además de haber trabajado en el Institute of Developing Economies-IDE, de Tokio, fue profesor invitado de la Universidad Kobe-Gakui, en Japón, e investigador invitado del Institute Francaise de Recherche Scientifique pour le Developpment et Cooperation. Recuerda que a la violencia política registrada durante el sexenio de Salinas –cuando ya había signos de violencia del narcotráfico– le siguió la violencia delictiva surgida después de la crisis financiera de 1995. Ante lo que caracteriza como violencia imparable entre 1995 y 1998, la respuesta del gobierno de Zedillo fue crear el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). El operador fue su secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, actual diputado electo del PRI, que en ese momento, estaba a cargo de la seguridad pública, tarea que pasó a la Secretaría de Seguridad Pública federal creada a principios del sexenio. En diciembre de 1995, Zedillo publicó la ley general del SNSP con la que pretendió coordinar de forma centralizada a todas las fuerzas policiales del país, pero sobre todo "metió al Ejército a participar en temas de seguridad pública y comenzó a patrullar las calles del Distrito Federal y ciudades fronterizas", señala Alvarado. "El Ejército entró de facto a esas labores sin las reformas ni los controles constitucionales necesarios. Lo hizo por una puerta administrativa y con el aval de la Suprema Corte", añade. "Zedillo creó un sistema de seguridad punitivo al que 14 años después, sin hacerle una evaluación real, se le sigue metiendo dinero y dándole más facultades y

elementos comopolicias nacionales sobre la misma base de la Policía Federal Preventiva", dice. En enero de este año, Calderón publicó las reformas al SNSP que, de acuerdo con el especialista, "le dieron enormes atribuciones al presidente, quien, junto con los gobernadores, ha gastado mucho más en seguridad, y sin ningún control porque no hay un sistema real de transparencia del gasto". Lo más grave es que Calderón ha abierto aún más la puerta para la intervención del Ejército, evalúa. Contrario al discurso de los militares, que dicen limitarse a responder a una necesidad específica, Alvarado encuentra que el Ejército sí tiene intereses políticos en esa participación. "Está interesado en mantenerse en el tema no sólo por razones administrativas y de seguridad. Lo hace a sabiendas de que está ante un conflicto real, no sólo de narcotráfico, sino, en el largo plazo, con la población", asegura. Muestra de ello ha sido su presencia en la procuración de justicia con Fox y en seguridad pública en todo el país con Calderón. Ilustra: durante el siglo XX, en la Ciudad de México, ocho de cada 10 jefes de la policía fueron militares, en su mayoría generales."

Si esto no dice que es un patrón de comportamiento de los altos mandos del Ejército y que no tienen interés e incentivos por ser jefes de una policía civil, entonces no hay intención política", ironiza. Alvarado cita información oficial de la Sedena para subrayar que, en los últimos ocho años, 90 militares de alto rango con licencia han sido jefes de policías estatales o municipales por todo el país. "Hay una militarización administrativa. En total, el Ejército reconoce que le ha dado permiso a 500 elementos para cumplir funciones de seguridad policial". Al arranque de su administración, Calderón dijo que la guerra contra el narcotráfico es importante, apunta, pero "lo ha sido para él, sólo para él", enfatiza. "Si bien reconoció el problema, utilizó al Ejército para apuntalarse. Eso todo el mundo lo sabe. Eso le dio popularidad. Pero sigue con una guerra en la que el Ejército se envuelve cada vez más y no sabemos si tiene las herramientas y las capacidades reales para enfrentarla, además de que tiene problemas por los abusos de militares contra la población." Asegura que si en realidad el Ejército es "la única" herramienta del Estado mexicano para enfrentar al crimen organizado, entonces hay que establecer el tiempo pertinente de su intervención y medir y evaluar esa guerra. Y urge a establecer controles legales y judiciales para

	<p>evitar no sólo los abusos, sino el incremento de su autonomía, como ha ocurrido, dice. Justifica que en la transición de un régimen priista a otro panista, y ante el aumento de la delincuencia, aumentara la autonomía militar y policial, tal y como ocurrió en las dictaduras que han transitado a democracias, pues los ejércitos siempre se reservan espacios políticos y de impunidad muy grandes, dice. "Pero ahora el Ejército tiene más autonomía, poder y dinero que con el PRI. Y si con el tiempo se ve que la de hoy era una guerra falsa, se entiende la necesidad de protegerlo hacia adelante, incluido su comandante en jefe, que es el presidente." Los controles al Ejército sólo pueden salir del Congreso y del Poder Judicial, recuerda, "pero en vez de apelar al Congreso, Calderón manda una andanada de iniciativas de ley muy punitivas y discrecionales para darle más poderes al Ejército, a la Marina y a su Policía Federal" (Proceso1708). El Legislativo tiene las facultades, pero no ha querido ejercerlas, dice, y resalta que el Congreso, además de llamar al Ejército a cuentas, tiene que limitar el fuero militar en los casos de violaciones a los derechos humanos, como ahora ocurren.</p> <p>En el caso del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría que hacer cumplir el principio de que nadie está por encima de la Constitución y que no debe haber tribunales especiales. Pero tampoco le ha querido entrar al fondo de esos temas, concluye, como lo demostró la semana pasada al negar un amparo contra la jurisdicción militar.</p> <p><b>INICIO</b></p>
12	<p><b>Los relevos en el gabinete se tardaron y son insuficientes, opinan diversos sectores</b>  Publication: La Jornada Newspaper  September 08, 2009</p>
	<p>DE LA REDACCIÓN</p> <p>Los relevos en el gabinete del presidente Felipe Calderón generaron posiciones encontradas en los sectores político, social, académico y hasta religioso, pero la nota insistente fue la opinión de que se tardaron, son insuficientes y que no reflejan los cambios profundos anunciados por el mandatario en su reciente Informe de gobierno. La designación de Juan José Suárez Coppel como nuevo director de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue, quizás, la más cuestionada, pues se le ubica como el personaje que instrumentó y operó el Pemexgate, y uno de los que contribuyeron a</p>

que el sindicato petrolero prácticamente fuera exonerado de haber recibido mil 500 millones pesos en 2000, de los cuales mil millones se transfirieron a la campaña presidencial del entonces candidato priísta Francisco Labastida Ochoa.

Legisladores de PRI, PRD y PT expresaron su franco rechazo, mientras que en el PAN hubo quienes hasta, en el mejor de los casos, mostraron cierta reserva, como el panista Javier Usabiaga, ex secretario de Agricultura en el gobierno de Vicente Fox y reconocido empresario del sector, quien de manera paradójica definió el perfil de Suárez Coppel: “es un hombre de negocios que ha hecho vida pública”.

Incluso, el consejero profesional de la paraestatal, Fluvio Ruiz Alarcón, dijo que esta designación no es la mejor, debido a que su nuevo director pudiera privilegiar una visión financiera por encima de las actividades industriales de la empresa.

El cambio que menos sorpresa provocó y que se esperaba desde hace semanas fue el del procurador Eduardo Medina Mora. Con este relevo, José Luis Piñeyro, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco y especialista en seguridad nacional, dijo que se abre la puerta para que el gobierno federal replantee su estrategia de combate al narcotráfico y al crimen organizado y se decida a atacar frontalmente la estructura financiera que protege a prestanombres, empresarios o políticos.

De la propuesta presidencial para que a ese lugar llegue Arturo Chávez, una vez que sea ratificado por el Senado, el coordinador de los diputados del PT, Pedro Vázquez, recordó que aquél fue procurador de Justicia de Chihuahua en el gobierno de Francisco Barrio, en la época en que se multiplicaron los feminicidios en Ciudad Juárez.

La designación de Francisco Mayorga como nuevo titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en sustitución de Alberto Cárdenas -de quien también se esperaba ya su cambio- provocó reacciones encontradas entre organizaciones campesinas.

En la serie de reacciones también opinó la Arquidiócesis de México. Dijo abiertamente que se esperaba más, porque “no solamente hay que cambiar a los titulares de las secretarías, sino también las políticas de las mismas, que no están funcionando del todo”.

	<b>INICIO</b>
13	<p><b>Narcos mexicanos retan soldados como si fueran otro ejército, según analistas</b>  Publication: Agencia EFE  Provider: Agencia EFE  December 07, 2009</p>
	<p>Juan David Leal México, 7 dic (EFE).- Los cárteles mexicanos de la droga desafían de manera abierta a las autoridades con acciones armadas más propias de un ejército privado que de una organización narcotraficante tradicional, coincidieron hoy varios analistas.</p> <p>El pasado viernes en la nortehña ciudad de Monterrey, capital del estado fronterizo de Nuevo León, doce sicarios y un civil murieron en un enfrentamiento entre delincuentes y el Ejército mexicano a plena luz del día en las calles de esa urbe.</p> <p>Los hechos tuvieron lugar cuando un grupo numeroso de presuntos sicarios del crimen organizado se enfrentó a muerte contra una unidad de militares en un rancho, del que se tenía información que funcionaba como un escondite de secuestrados.</p> <p>Al llegar, los soldados fueron recibidos a tiros por alrededor de cincuenta delincuentes armados hasta los dientes. En ese punto fallecieron siete de los presuntos delincuentes y nueve más fueron detenidos.</p> <p>Otro grupo de decenas de criminales logró darse a la fuga a bordo de unas 15 camionetas, empuñando sus armas largas por las ventanas de los autos, y en su huida se topó con un contingente de 30 militares enviado para apoyar a los otros soldados, lo que derivó en un nuevo choque armado, en el que murieron cinco sicarios más y un civil al ser impactado por una bala perdida.</p> <p>Esa acción es solo un ejemplo del comportamiento del narcotráfico mexicano, que ataca estaciones de policía, embosca convoyes de agentes federales y soldados, irrumpe a sangre y fuego en cárceles para liberar a sus cómplices y se pasea por las ciudades en caravanas de camionetas de lujo con fusiles de asalto, bazucas, granadas y armas antiaéreas.</p> <p>A juicio de Jorge Chabat, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y experto en narcotráfico y seguridad nacional, el enorme poder económico de los narcos mexicanos y el continuo ataque de las fuerzas del Estado explican que estos grupos reten directamente a las autoridades en operaciones de</p>

campo.

"A un poder organizado como el Ejército responden con otro poder: con ejércitos privados y con una capacidad de fuego que busca equipararlos", señaló Chabat en entrevista con Efe.

El Gobierno mexicano ha desplegado a 45.000 soldados y 20.000 policías federales en los estados más conflictivos del país para combatir al narcotráfico.

Chabat recordó que algunas organizaciones de narcotraficantes mexicanas han reclutado en sus filas a militares desertores.

Tal es el caso de Los Zetas, fundado por ex militares y considerado por las autoridades mexicanas como el brazo armado del cártel del Golfo, que "efectivamente tienen entrenamiento y disciplina militar, y experiencia en el manejo de armas de alto poder", dijo el experto, quien, no obstante, advierte que este no es el caso de todas las organizaciones dedicadas al narcotráfico en el país.

El cártel de Sinaloa y Los Zetas han incluso reclutado a antiguos soldados guatemaltecos de elite conocidos como "kaibiles".

"Hay otros cárteles más tradicionales con menos capacidad militar, que si bien tienen armas de alto poder, la logística que desarrollan no es tan sofisticada", explicó.

José Luis Piñeyro, sociólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), destacó, en cambio, que los ataques "de tú a tú" del narcotráfico contra las fuerzas armadas es un fenómeno reciente de hace apenas un año.

El experto dijo a Efe que la intención de los narcos es mostrar que pueden llevar a cabo este tipo de acciones y desnudar la debilidad de las autoridades.

Hay un "reto abierto y casi sistemático a las fuerzas armadas: a violencia respondemos con más violencia, a acciones de arresto colectivo, respondemos con liberaciones colectivas, una acción y reacción que antes no existía en México", apuntó.

Sobre los ataques a penales para liberar delincuentes, consideró que hay de por medio una cuestión de prestigio de las organizaciones de traficantes de droga, que desean enviar el mensaje a los policías corruptos: "si son capturados, serán rescatados". EFE jd/pvo/pmc

**INICIO**

